

7 Mesa 3.1. Situación en Iberoamérica

7.1 «Los riesgos de la creciente militarización en América Latina»

Autor: profesor Rafael Martínez Martínez

Resumen

Desde la finalización de las dictaduras hasta la actualidad, las fuerzas armadas han experimentado una evolución institucional significativa que, con oscilaciones en su intensidad, ha consolidado la supremacía civil en la arquitectura institucional de la Defensa; ha reducido de manera sustancial la justicia militar concebida como fuero privilegiado de los uniformados, aunque persisten reformas pendientes; ha incorporado progresivamente a la mujer, aunque todavía con presencia minoritaria; y ha desarrollado capacidades de planificación estratégica, constituyéndose en un modelo referencial en los países con mayor grado de consolidación democrática.

Además, en el medio y largo plazo no se vislumbran amenazas de guerra en América Latina. Esta circunstancia genera discusiones en torno a la conveniencia de mantener o no las fuerzas

armadas y todas sus capacidades, de si corresponde continuar destinando recursos a una amenaza —la guerra— que se percibe improbable, así como a qué dedicar todas estas capacidades en caso de preservarlas. De ello derivan cuatro posturas claramente identificables: 1) los abolicionistas, que aprovechan la coyuntura para reclamar la supresión de los ejércitos; 2) los normativos o esencialistas, aferrados a la tradición prusiana de las funciones militares y reacios a cualquier alternativa; 3) los adaptativos, que, partiendo del reconocimiento de las funciones esenciales —disuasión y defensa—, consideran posible la actualización de sus cometidos; 4) Por último, los pragmáticos, quienes optan por asignarles nuevos roles y misiones de todo tipo y condición —incluso muy ajenas a lo militar— tal cual vayan surgiendo necesidades estatales.

Esta última opción, que es la predominante, ha dado lugar a un proceso global en la región de militarización que no está exento de riesgos. En el peor de los escenarios (Venezuela, Nicaragua, Guatemala, El Salvador...), podrían estar mostrándonos una vuelta al militarismo que nunca viene solo, sino que siempre viene acompañado de la pérdida de la democracia.

Palabras clave:

América Latina, militarización, militarismo, administración, comodín, Fuerzas Armadas.

Cómo citar este documento

Martínez Martínez, R. (2025) Los riesgos de la creciente militarización de América Latina. Ponencia. *I Jornadas Geopolíticas del IEEE*. Segovia, La Granja de San Ildefonso.

Desde el final de las dictaduras hasta nuestros días ha habido, con mayor o menor intensidad, una nada desdeñable evolución institucional de las fuerzas armadas que, por ejemplo: ha generalizado la supremacía civil en la estructura institucional de la Defensa; casi ha erradicado la justicia militar entendida como privilegio a los uniformados, aunque restan reformas por emprender; ha integrado a la mujer, si bien todavía en porcentajes exigüos; o ha explorado la planificación estratégica, consolidándose como modelo en los países con mayor desarrollo

democrático. Así las cosas, si bien puede afirmarse que ese tránsito democratizador, desde el poder político hacia una administración más, se ha realizado con éxito en prácticamente toda la región, no ocurre lo mismo con la consolidación democrática de ese mismo proceso. En este punto, existen déficits importantes en casi toda la región.

Por otro lado, no se advierten riesgos bélicos en el horizonte inmediato, y aún remoto, de América Latina. Ello provoca debates sobre la necesidad, o no, de mantener la maquinaria defensiva; de si seguir destinando, o no, recursos a un riesgo —el bélico— que no resulta probable y también sobre a qué dedicar a las fuerzas armadas en caso de mantenerlas. Como respuesta a esos interrogantes encontramos cuatro posicionamientos:

1. Los abolicionistas, que aprovechan la coyuntura para solicitar la erradicación de los ejércitos;
2. los normativos o esencialistas, que quedan agarrados a la tradición de las funciones prusianas y no quieren oír hablar de ninguna otra posibilidad;
3. los adaptativos, que partiendo del respeto a las funciones esenciales —disuasión y defensa— entienden factible una actualización de sus roles. En esa dinámica de actualización y modernización constante se impone la lógica de tres «r» (Martínez, 2020), según la cual, las FAS, para poder sobrevivir al cambio de realidad sin desenfocarse de su rol defensivo, deben redefinir sus misiones, redimensionar su volumen y, al fin, reconvertir la presumible parte excedentaria en activos de otras agencias. En otras palabras, el futuro de los ejércitos no pasa por amplios contingentes humanos, sino por ejércitos pequeños con alta tecnificación y movilidad (Dandeker, 2000).
4. Por último, los pragmáticos, quienes considerando que, dado que reformar y modernizar a las FAS puede ser una trampa política de la que se sabe cómo empieza todo, pero no cómo acaba, y que mantenerlas ociosas es un lujo inasumible, resulta mucho más sencillo, y a nadie incomoda, asignarles misiones de todo tipo y condición —incluso muy ajenas a lo militar— tal cual vayan surgiendo necesidades estatales.

Así las cosas, América Latina es un espacio geográfico en el que las principales amenazas que atenazan a los Gobiernos no provienen de otros Estados, pero sí que las hay vinculadas al

crimen organizado transnacional, a la ciberdelincuencia, a la creciente ola de inseguridad por el incremento de la criminalidad o a las migraciones descontroladas, por citar algunos ejemplos. Fenómenos estos que están redirigiendo a la milicia hacia misiones de seguridad pública.

Igualmente, resulta obvio que el cambio climático y los desastres naturales a él aparejados son un grave problema que enfrenta la región. Como también lo son los severos déficits en el estado del bienestar, tales como la salud pública, la escolarización, la creciente desigualdad o las carencias de desarrollo de determinados poblados indígenas. Todas estas realidades están justificando que las tropas están también asumiendo tareas focalizadas en el desarrollo del país —entendiendo por tal la extensión de servicios básicos—, así como de gestión de catástrofes —suceso que genera gran destrucción o daño— y calamidades —desgracia o infortunio que alcanza a muchas personas—. Tendencias todas ellas que, lejos de una redefinición de roles, encierran el riesgo de la militarización.

De hecho, militarizar las emergencias, el desarrollo y la seguridad pública supone que el adiestramiento, equipamiento y doctrina de los militares para sus tareas de disuasión y defensa se resiente y puede, con toda probabilidad, erosionar su eficacia. Al mismo tiempo, el adiestramiento, equipamiento y doctrina que se atesora como militar, siendo útil en una emergencia, no es el óptimo para ejercer de protección civil, como tampoco lo es para ejercer de policía o de trabajador social. Toda esta dinámica global en la región de militarización, desde el pragmatismo, puede ser comprendida; pero en lo más mínimo está exenta de riesgos. Incluso, uno de los firmes defensores del pragmatismo como Pion-Berlin (2016) plantea límites a esa profusión de actividades con el fin de no caer en dinámicas de militarismo: 1) nunca en zonas densamente pobladas, 2) nunca enfrentar programas sociales, 3) nunca si la misión requiere formación y material que les sea ajeno, y 4) nunca si tienen que ejercer como policías.

Las FAS tienen por funciones principales la disuasión y la defensa. Ellos son los roles propios de los que derivan la misiones que luego desempeñarán. Junto con estos roles principales, existen los denominados roles auxiliares, es decir, colaborativos y secundarios al tiempo. Colaborativos dado que se trata de misiones en los que las FAS acudirán en auxilio del Estado, secundarios porque no son inherentes a su actividad, sino impropias al rol

definitorio —disuasión y defensa— de la administración militar. Es decir, a su preparación, a su equipamiento y a su doctrina, pero, en cambio, ante la ausencia de mejor recurso, las capacidades logísticas y la distribución territorial de los ejércitos los pueden hacer necesarios.

La realidad es que, prácticamente todos los países han integrado en su cuerpo normativo el orden interno, el desarrollo nacional y la actuación frente a desastres y calamidades como actividades en las que las FAS, bajo determinadas circunstancias, pueden ayudar. Pero, aunque jurídicamente están recogidos como funciones de apoyo, por tanto, auxiliares, la práctica cotidiana es que, en previsión de la habitualidad de estos tres cometidos, las FAS también se equipan, adiestran y adoctrinan en el desempeño de esas actividades como principales.

La pregunta que no ha de dejarse de hacerse es ¿por qué esa militarización? Junto con Alberto Bueno (2023, 2024, 2025), se han identificado cuatro justificaciones posibles que, por lo demás, en nada ayudan al proceso de consolidación democrática de la administración militar. En primer lugar, la militarización pudiera ser un indicador de *militarismo*, bien porque la transición nunca culminó —sería el caso de Guatemala—. Bien porque, aunque se inició la transición democrática, hay una involución que ubica al militarismo de vuelta —sería el caso del Brasil del presidente Jair Bolsonaro o de la Nicaragua tras la vuelta del autócrata Ortega—.

En segundo lugar, la militarización, sobre todo la volcada en desarrollo y en emergencias, también puede amagar un proceso de *lavado de imagen* con el que conseguir una mayor aceptación social. Tal y como acontece en México, esa dedicación constante a misiones de auxilio social tiende a generar percepciones sociales muy positivas para con sus ejecutores. Incluso si un gobernante pensase que la ausencia de riesgos de naturaleza defensiva aconseja la abolición de los ejércitos, porque su función es ya inservible para la sociedad, podría lograr una abolición encubierta a través de este proceso de desnaturalización de su función primigenia.

La tercera explicación no habla de miedos, ni de recelos, sino pragmatismo puro y duro. Los decisores políticos no encuentran la necesidad de desmontar una buena administración ya existente. Administración que, si bien no va a defendernos, puede darnos todo tipo de prestaciones útiles: una *administración comodín*. En

su imaginario, con esas misiones no defensivas, los militares tienen una ocupación, la sociedad lo agradece y a ellos les resuelven problemáticas. Por tanto, si todo el mundo gana, ¿dónde está el problema? Esa opción por la administración comodín, a sus ojos, solo ofrece ventajas. Pero Jenne y Martínez (2022) advierten de los peligros que esa dinámica comporta: 1) quiebra de la seguridad jurídica; 2) supone un fracaso en la reforma y modernización militar; 3) implica serias dificultades en el desarrollo de capacidades civiles, y 4) el abuso de la administración comodín presenta concordancias con una cultura política antidemocrática.

En cuarto y último lugar, la militarización, ante la infructuosa lucha policial contra organizaciones delincuenciales, tiene por objetivo el *incremento del uso de la fuerza*. Sería, sin lugar a duda, el caso del presidente salvadoreño Bukele y sus requerimientos de mano dura contra los pandilleros, de hecho, siempre se ha referido a «estar en guerra» contra ellos. Los ejércitos son utilizados en seguridad pública porque la capacidad de fuerza de las organizaciones criminales supera a la policial y el Estado quiere poder replicar con mayor intensidad para tener alguna posibilidad de desalentar a estos cárteles.

Recapitulando

De todo lo explicado creo que surgen dos ideas nítidas: 1) en general, en la región aún restan ámbitos en los que modernizar a las FAS en su necesario progreso hacia la consolidación democrática; 2) la ausencia de amenazas bélicas no ha conducido a un debate estratégico que se plantee la posibilidad de redimensionamiento y de redefinición expansiva hacia el exterior de la política de Defensa, sino que ha mantenido las estructuras y, por la vía del pragmatismo, ha reconvertido a los ejércitos, no en una administración militar, sino en una administración comodín.

Los Estados deberían hacer esfuerzos por articular las agencias administrativas necesarias para las amenazas que poseen y quizá ello comporte la redimensión del volumen de tropas y la reconversión de partes de sus ejércitos en esas otras administraciones especializadas que sí requieren. Pero esa Caja de Pandora, a buen seguro, pocos la querrán abrir.

*Rafa Martínez**

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración
Universidad de Barcelona

7.2 «Una oportunidad para el proyecto iberoamericano»

Autora: Cristina Manzano Porteros

Resumen

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha colocado a América Latina en el centro del debate geopolítico. Muchas de las prioridades del nuevo presidente estadounidense tienen como foco una región que oscila entre la dependencia económica, tanto de Estados Unidos como de China, y el deseo de no verse atrapado en una lucha entre grandes potencias. Con todos los desafíos que el panorama global implica, se abren también oportunidades para una relación reforzada entre los países latinoamericanos y los de la Unión Europea, así como para el futuro del proyecto iberoamericano.

Palabras clave

Iberoamérica, Unión Europea, Estados Unidos.

Cómo citar este documento

Manzano Porteros, C. (2025). Una oportunidad para el proyecto iberoamericano. <i>I Jornadas Geopolíticas del IEEE</i> . Segovia, La Granja de San Ildefonso.
--

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha puesto a América Latina en el centro de los análisis geopolíticos. La región ha pasado décadas aspirando a dejar de ser considerada el patio trasero de Estados Unidos y reclamando una mayor atención por parte de Washington y lo ha conseguido, aunque de un modo abrupto. Tras las primeras medidas de la nueva presidencia, desde el tratamiento de la inmigración a los aranceles, desde la batalla contra el fentanilo a la rivalidad con China, la relación de los países latinoamericanos con el vecino del norte desde el mismo 20 de enero ha experimentado un cambio radical.

A estas alturas, sigue sin estar claro si el objetivo principal de la Administración Trump es recuperar en toda su amplitud la doctrina Monroe —América para los americanos— como guía para su

política hacia el llamado hemisferio occidental o si sus acciones responden a cálculos transaccionales. Al fin y al cabo, América Latina posee grandes reservas de los minerales que necesita el mundo para las transiciones verde y digital —la segunda parece importarle más al presidente norteamericano que la primera— y es un territorio donde la presencia y la influencia chinas han ido aumentando exponencialmente en los últimos años. Sea como sea, ha introducido nuevos factores de incertidumbre a un panorama que ya pintaba poco estable. Las declaraciones sobre convertir Canadá en un nuevo Estado o sobre retomar el control del canal de Panamá alejan a Estados Unidos de los postulados que antaño defendió de un orden mundial basado en reglas y reintroducen la coerción y el poder duro como motores de las relaciones internacionales. Un cambio de rumbo que también se ha hecho sentir muy notablemente en la posición estadounidense hacia Ucrania y Rusia y que en Europa se ha recibido como un auténtico fin de era, aquella en la que europeos y norteamericanos eran aliados preferentes y privilegiados.

Esta nueva realidad está llamada a modificar la situación geopolítica de Iberoamérica, sin que aún se sepa muy bien cómo será el nuevo orden resultante.

En cualquier caso, el actual panorama geopolítico de América Latina muestra una serie de características, que aquí solo se enumeran:

1. La dependencia de México y Centro América de Estados Unidos, frente a la dependencia de China del sur del continente.
2. La fragmentación en torno a líneas ideológicas.
3. El deseo de no verse atrapados en la rivalidad de las dos grandes potencias.
4. La debilidad de los procesos de integración.
5. La ambigüedad sobre el orden global que defiende la región.

Un contexto complejo que, sin embargo, puede ofrecer también nuevas oportunidades tanto para Europa como para la Comunidad Iberoamericana.

La Unión Europea, en palabras de la presidenta de la Comisión Europea, ya identificó a América Latina como un aliado prioritario en el marco de la agresión rusa a Ucrania y la necesidad de garantizarse productos estratégicos. La alineación de valores, las complementariedades económicas y los vínculos históricos, culturales y humanos (estos últimos especialmente con España

y Portugal) más que justifican una nueva relación entre ambos lados del Atlántico. La escenificación de ese relanzamiento, después de años de alejamiento, fue la Cumbre UE-CELAC celebrada en Bruselas en 2023, con el impulso de la presidencia española del Consejo y del entonces Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión, Josep Borrell.

La llegada de un nuevo equipo a la Comisión, el peso de la guerra en Ucrania y la amenaza rusa en la política exterior comunitaria, así como las dificultades para un diálogo armonizado en América Latina, también en CELAC, arrojaron cierto escepticismo sobre el mantenimiento de los compromisos. Sin embargo, los desafíos planteados por la presidencia Trump pueden servir de revulsivo para reforzar la otra relación trasatlántica.

Como muestra, el 6 de diciembre de 2024, poco antes del cambio de mando en Estados Unidos, Bruselas y MERCOSUR concluyeron las negociaciones sobre el acuerdo que llevaba años bloqueado. Queda por delante un largo proceso de ratificación en Europa, en diferentes niveles, y es probable que se acaben separando los componentes políticos y los comerciales para facilitar su entrada en vigor. Según un estudio del Real Instituto Elcano, de ratificarse, la UE tendría acuerdos comerciales con el 95 % del PIB de América Latina, posicionándola como el principal socio estratégico de América Latina y al MERCOSUR como un actor clave en cadenas de suministro sostenibles y de alto valor añadido¹.

Algo más tarde, ya en enero, se cerró la modernización del Acuerdo UE-México, otro paso en la integración comercial de ambos bloques.

La apuesta por el libre comercio, el desarrollo sostenible y el multilateralismo son las bases sobre las que asentar una relación euro-latinoamericana reforzada, en un momento en el que los tres elementos están siendo cuestionados desde Estados Unidos. «La fortaleza de la relación UE-ALC nace de una historia común de profundos vínculos entre nuestros pueblos. Compartimos el compromiso con unos valores que no son solo europeos, sino universales. La democracia, los derechos humanos, un orden internacional basado en reglas. También compartimos la convicción de defender nuestros intereses al tiempo que sacamos lo mejor de nuestras alianzas. En Europa lo llamamos autonomía estratégica;

¹ Disponible en: <https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/ue-MERCOSUR-plataforma-hacia-una-nueva-era-de-integracion-transatlantica-e-intrarregional-latinoamericana/>

en América Latina y el Caribe lo llaman soberanía, pero queremos decir lo mismo», declaró la Alta Representante Kaja Kallas en un acto en el Parlamento Europeo en febrero.

Es también una buena ocasión para reafirmar el papel de la Comunidad Iberoamericana, la formada por los diecinueve países de América Latina que hablan español o portugués y por los tres de la península ibérica (España, Portugal y Andorra). En una región en donde los diferentes intentos de integración han sufrido todo tipo de vaivenes, la Conferencia Iberoamericana ha sido capaz de mantener un espacio de diálogo político a distintos niveles. Además, la Cooperación Iberoamericana se ha consolidado como un modelo único en el que son los países los que deciden sobre qué quieren cooperar. Más de treinta programas en los más diversos campos, desde la cultura hasta la ciencia, desde la salud hasta la discapacidad o el acceso a la justicia trabajan por contribuir a transformar las políticas públicas en beneficio de sus ciudadanías. Con un pie en América y otro en Europa, los países iberoamericanos ejercen naturalmente esa relación entre ambas regiones. La pertenencia de sus miembros a una variedad de iniciativas e instituciones globales —BRICS, G20, Grupo de los 77— facilita una visión y una comprensión del mundo excepcional en estos tiempos en que los parámetros, hasta ahora vigentes, están perdiendo validez. Los principios operativos de la Comunidad —la horizontalidad, la inclusión y el consenso— representan un modo de multilateralismo que, sin estar exento de dificultades, ha conseguido avanzar durante más de treinta años en un contexto global cambiante. Y, junto con todo ello, los vínculos humanos que unen a la Comunidad trascienden las circunstancias de la política.

«Los países de la región perciben a la Comunidad como un espacio para fortalecer el diálogo político, como una instancia para adoptar posiciones comunes frente a los temas globales, como un instrumento para impulsar la cooperación, como un mecanismo para generar derechos y como una plataforma para que la vinculación entre América Latina y Europa sea más fuerte», ha afirmado el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.

El hecho de que la próxima Cumbre se celebre en Madrid en 2026, supone una nueva oportunidad para revitalizar el proyecto iberoamericano. Según José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno español «para España, el objetivo fundamental es iniciar una nueva etapa de reafirmación y consolidación del sistema, de identificación de

nuevas prioridades y de reorganización de los métodos de trabajo. Para ello, se ha recibido un claro mandato de los miembros orientado a poner en marcha una profunda reflexión con el objetivo de fortalecer y adaptar los métodos de trabajo del sistema iberoamericano a los tiempos actuales».

El ejemplo de un multilateralismo eficaz será el mejor antídoto contra quienes defienden una vuelta a las esferas de influencia y el poder del más fuerte.

*Cristina Manzano Porteros**

Directora de Relaciones Externas
Secretaría general iberoamericana

7.3 «Situación en Iberoamérica». Resumen del debate

*Recopilación efectuada por el moderador: teniente coronel Francisco
Márquez de la Rubia*

1 Los riesgos de la creciente militarización de América Latina

Desde el final de las dictaduras en América Latina, las Fuerzas Armadas han experimentado avances institucionales significativos. Se ha consolidado la supremacía civil en la defensa, se han reducido los privilegios de la justicia militar, se ha promovido la inclusión femenina (aunque en porcentajes bajos) y se ha impulsado la planificación estratégica. Sin embargo, aunque la transición hacia la democracia ha sido exitosa en gran parte, persisten déficits democráticos en varios países, especialmente en lo relacionado con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre política de defensa.

Actualmente, la región no enfrenta riesgos bélicos inmediatos, lo que ha generado debates sobre la necesidad de mantener las fuerzas armadas y sobre su posible redefinición. Cuatro posturas destacan:

- Abolicionistas: proponen la erradicación de los ejércitos ante la ausencia de amenazas bélicas, argumentando que los recursos asignados a la defensa podrían redirigirse a políticas sociales más urgentes.
- Normativos o esencialistas: Defienden la tradición de las funciones prusianas de defensa y disuasión, resistiéndose a cualquier intento de redefinir los roles de las fuerzas armadas.

- Adaptativos: Plantean la modernización de las fuerzas armadas, enfocándose en redefinir sus misiones y redimensionar sus recursos para adaptarse a las nuevas amenazas, como el crimen organizado y los desastres naturales.
- Pragmáticos: Proponen asignar misiones diversas a las fuerzas armadas, incluso fuera del ámbito militar, para justificar su permanencia y utilidad ante la sociedad.

Esta última opción, predominante en la región, ha propiciado una militarización que conlleva riesgos, como la erosión de la democracia en casos como Venezuela, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. La militarización de áreas como la seguridad pública, la gestión de emergencias y el desarrollo nacional puede afectar la preparación defensiva de las fuerzas armadas y, a largo plazo, desnaturalizar su rol principal. Esto se traduce en una pérdida de eficiencia en sus misiones originales y en una sobrecarga operativa que puede afectar la calidad de su desempeño.

Las razones identificadas para esta tendencia incluyen el intento de lavar la imagen militar, la conveniencia administrativa, el incremento del uso de la fuerza ante desafíos criminales y el mantenimiento de las fuerzas armadas como una «administración comodín». Esta última, aunque práctica a corto plazo, representa riesgos democráticos y limita el desarrollo de capacidades civiles especializadas. Además, contribuye a una percepción errónea sobre la verdadera naturaleza de las funciones militares, difuminando las líneas entre la seguridad interna y la defensa nacional.

2 Una oportunidad para el proyecto iberoamericano

El retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha colocado a América Latina en el foco geopolítico y ha aumentado la tensión entre la influencia estadounidense y china. Esta situación ha generado incertidumbre sobre el papel de la región en el nuevo orden global, sobre todo, en relación con temas como la inmigración, los aranceles, la lucha contra el fentanilo y la influencia geopolítica sobre Canadá y el Canal de Panamá.

La región enfrenta desafíos complejos, como la dependencia económica dividida entre el norte (Estados Unidos) y el sur (China), la fragmentación ideológica, la debilidad de los procesos de integración y la ambigüedad sobre el orden global que defienden. No obstante, esta coyuntura también ofrece oportunidades para fortalecer los lazos entre América Latina y la Unión Europea (UE),

estableciendo nuevas formas de cooperación estratégica que puedan fomentar un desarrollo más autónomo y sostenible.

La UE ha identificado a América Latina como un aliado estratégico, especialmente en el contexto de la guerra en Ucrania y la necesidad de garantizar suministros estratégicos. La Cumbre UE-CELAC de 2023 en Bruselas marcó el relanzamiento de las relaciones, destacando la importancia de la cooperación en valores democráticos, desarrollo sostenible y multilateralismo. Este relanzamiento representa una oportunidad crucial para abordar problemáticas comunes como el cambio climático, la transición energética y la innovación tecnológica.

El acuerdo comercial alcanzado en 2024 entre Bruselas y MERCOSUR, junto con la modernización del Acuerdo UE-México, refuerza este vínculo estratégico. La consolidación de estos acuerdos podría posicionar a la UE como el principal socio económico de América Latina, fortaleciendo cadenas de suministro más sostenibles y promoviendo la transferencia tecnológica.

Además, la Comunidad Iberoamericana, que agrupa a los países de América Latina, España, Portugal y Andorra, representa una plataforma única para el diálogo y la cooperación en diversas áreas, desde la cultura hasta el desarrollo social. Su próxima cumbre en Madrid en 2026 se presenta como una oportunidad clave para reforzar estos lazos y adaptar las estrategias a las nuevas realidades globales, fortaleciendo las instituciones iberoamericanas y promoviendo proyectos de desarrollo conjunto.

3 Las nuevas tensiones geopolíticas y la amenaza de intervención

Durante décadas, América Latina ha evitado en gran medida los conflictos interestatales, siendo las luchas internas y las economías criminales los principales focos de tensión. Sin embargo, la competencia geopolítica entre grandes potencias, la inestabilidad económica y las tensiones bilaterales están cambiando esta dinámica y aumentando el riesgo de disputas entre Estados.

Las tensiones se intensifican en puntos clave como la disputa territorial entre Venezuela y Guyana, el conflicto fronterizo entre Nicaragua y Colombia y las fricciones entre República Dominicana y Haití. Además, la retórica combativa de la administración Trump hacia países como México y su obsesión con el Canal de Panamá generan riesgos políticos significativos, incluyendo la posibilidad de intervenciones militares estadounidenses.

La falta de foros regionales eficaces para coordinar estrategias de mitigación, como UNASUR y su Consejo de Defensa Sudamericano, limita las capacidades de respuesta conjunta ante estas amenazas. La creciente influencia de potencias externas y la retórica intervencionista refuerzan la urgencia de fortalecer las instituciones regionales para enfrentar los desafíos comunes desde una perspectiva colectiva y consensuada.

En este contexto, los países de América Latina deben buscar estrategias que fortalezcan su autonomía y cohesión interna y evitar ser arrastrados a las dinámicas de confrontación entre grandes potencias. La cooperación interamericana, el fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana y la consolidación de vínculos estratégicos con la UE representan caminos viables para reforzar su posición en el escenario global. Además, es crucial fomentar iniciativas regionales que promuevan la integración económica, la sostenibilidad ambiental y la gobernanza democrática.

En conclusión, frente a la incertidumbre y las tensiones geopolíticas, el fortalecimiento de las relaciones entre América Latina y la UE, así como el impulso del proyecto iberoamericano, se presentan como vías estratégicas para garantizar una mayor autonomía y cohesión en el escenario internacional. Estos desafíos también representan una oportunidad para repensar el papel de la región en el mundo, promoviendo una agenda de desarrollo inclusiva y respetuosa de las particularidades culturales y económicas de cada país.

Teniente coronel. Francisco Márquez de la Rubia
Analista del IEEE
@FMarquezdl